

Estados Unidos- Nicaragua. Entre la reversión y los esfuerzos de paz (1981-1987)

Lucrecia Lozano

El objetivo fundamental de la estrategia de Estados Unidos hacia Nicaragua es la reversión (*rollback*) del proceso revolucionario.

La reversión, novedosa en el quehacer militar y de seguridad de Estados Unidos en el Tercer Mundo, es, junto con la contrainsurgencia clásica y la lucha contra el terrorismo, uno de los tres ejes de la denominada estrategia de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), cuyo desarrollo y aplicación tienen lugar bajo las dos gestiones presidenciales de Ronald Reagan.

La política de la contención que en el terreno militar y de las relaciones internacionales resucitan en los años ochenta los neoconservadores y que está determinada por la no tolerancia de movimientos populares y de regímenes "hostiles", va más allá en el caso de la propuesta de la GBI al exigir la reversión de los procesos populares y revolucionarios triunfantes que son considerados una amenaza para la seguridad estadounidense.

Como estrategia alternativa a la intervención militar directa —la cual, en lo general y tras la derrota de Vietnam, se estima como una opción con muy altos costos políticos y materiales—, la reversión, conocida también como "Doctrina Reagan", es ejecutada en sus aspectos militares no por tropas del ejército estadounidense sino por fuerzas contrarrevolucionarias promovidas por Washington.

Así, lo que bajo doctrinas de seguridad anteriores a la administración Reagan se denominó la desestabilización de gobiernos populares y revolucionarios e implicó el desarrollo de actividades encubiertas, secretas y clandestinas, bajo el actual régimen republicano, si bien se continúan desplegando las acciones encubiertas y secretas, el término desestabilización "se sustituye por el de reversión, deja de ser una política encubierta, se asume como política de Estado avalada por el propio congreso norteamericano, e incluye la construcción de insurgencias contrarrevolucionarias".¹

De manera similar al planteamiento estratégico de la GBI, el eje de la reversión se caracteriza por la globalidad de su propuesta, que va más allá de lo estrictamente militar e incorpora la dimensión política en el análisis. En la reversión, aunque se mantiene como fundamental la respuesta militar, se incorporan a ella acciones ideológicas, políticas, económicas, diplomáticas, etc., a las cuales se les asigna una importancia y valor sustantivos en la aplicación de esta política. En la medida, además, que el objetivo de la reversión es global —con especial énfasis en lo político— y no sólo militar, existe la certeza de que la aplicación de esta política es a mediano y largo plazo. La reversión implica, así, una guerra en todos los frentes —político, económico, social, militar, ideológico, cultural, etc.—: una guerra contrarrevolucionaria prolongada.

El haberse erigido en una política oficial, impulsada y propagandizada públicamente por el propio presidente de Estados Unidos y cuya aplicación en el Tercer Mundo,² y particularmente en Nicaragua, ha implicado en más de una ocasión el desafío a los principios del derecho internacional,³ es, sin duda, uno de los más peculiares —y peligrosos— rasgos de esta estrategia global.

La aplicación de la estrategia de la reversión contra el gobierno nicaragüense se inició inmediatamente

² Los otros escenarios de aplicación de la estrategia de la reversión o "Doctrina Reagan" son, además de Nicaragua en Centroamérica: Afganistán, en Asia; Campuchea, en el Sudeste Asiático; y Angola, en África.

³ El gobierno de Estados Unidos se negó a acatar el fallo del 27 de junio de 1986 de la Corte Internacional de Justicia, que condenaba las actividades militares y paramilitares estadounidenses contra Nicaragua por considerarlas violatorias del derecho internacional. Por su parte, George Shultz, secretario de Estado norteamericano, afirmaba en una intervención pública en enero de ese año: "Es absurdo argüir que las leyes internacionales nos prohíben capturar a los terroristas en el espacio aéreo o aguas internacionales; o nos vedan atacarles en el territorio de otras naciones incluso para el objetivo de rescatar rehenes; o que nos impidan utilizar la fuerza contra Estados que apoyan, entrenan y abrigan a terroristas o guerrilleros. A una nación atacada por terroristas le está permitido utilizar la fuerza para impedir o prevenir ataques futuros, para capturar a los terroristas o para rescatar a sus ciudadanos, cuando no está disponible ningún otro medio". George Shultz, *Op. Cit.*

¹ Lilia Bermúdez, *Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Nicaragua*, Siglo XXI, Editores México, 1987, p. 161.

te después del arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca. Nicaragua se convirtió, de hecho, en el "caso prueba" de la implementación de la llamada "Doctrina Reagan"

Aunque esta política ha sido acuñada bajo la administración del presidente Reagan, durante los últimos meses de la gestión del demócrata James Carter se establecieron importantes precedentes respecto de lo que sería el nuevo trato con el gobierno sandinista en Nicaragua. En otoño de 1980, tras de que inicialmente pretendiera establecer una política de relación y no confrontación con las fuerzas revolucionarias nicaragüenses y en un claro viraje de esta orientación, Carter autorizó un programa de un millón de dólares propuesto por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ayudar a las organizaciones políticas y laborales y a los medios de prensa opuestos al régimen revolucionario.

En marzo de 1981, el presidente Reagan emitió la primera decisión de su gobierno con relación a Nicaragua, por medio de la cual autorizaba a la CIA a llevar a cabo actividades encubiertas contra el país centroamericano. En ese entonces, William Casey, director de la CIA, entregaba a los comités de inteligencia del Congreso y del Senado el informe presidencial que sostenía que las operaciones secretas en Centroamérica eran fundamentales para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A partir de este momento, el papel de la CIA en la definición y desarrollo de la política exterior ha-

cia algunos países del Tercer Mundo tendría un peso destacado. Casey había presentado al Ejecutivo en el mismo mes de marzo variadas peticiones de ayuda encubierta a las fuerzas pro-norteamericanas en Afganistán, Laos, Campuchea, Grenada, Irán, Libia, Cuba y Nicaragua.⁴

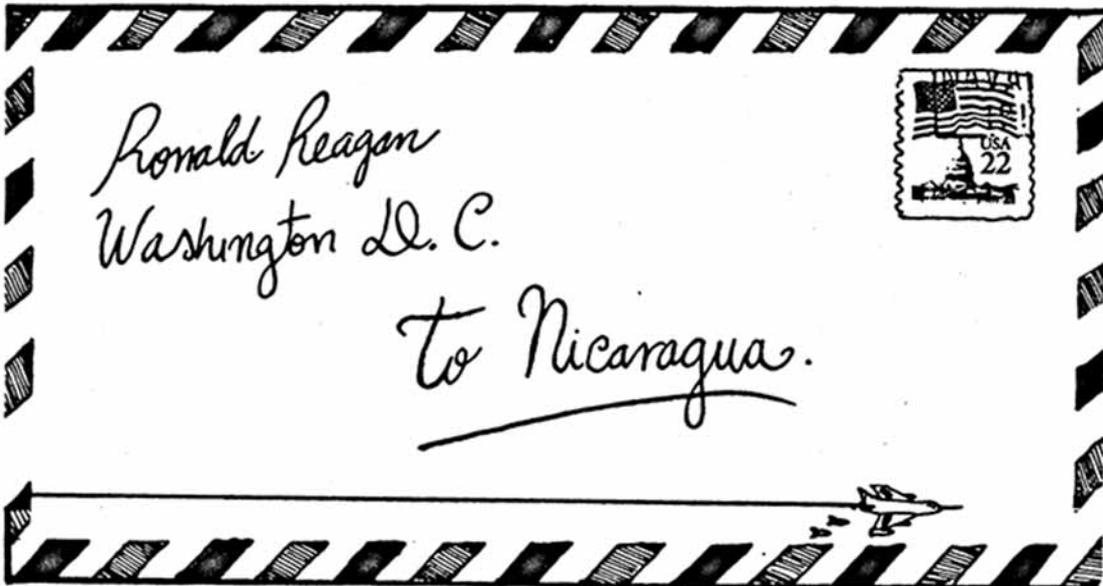
En un segundo fallo presidencial con relación a Nicaragua, el 23 de noviembre de 1981 y por medio de la Directiva de Decisión de Seguridad Nacional 17 (National Security Decision Directive, NSDD-17), la Casa Blanca autorizó 19.95 millones de dólares a la CIA para construir una fuerza de 500 hombres destinada a desarrollar "operaciones políticas y paramilitares en Nicaragua"⁵ y para trabajar conjuntamente con gobiernos extranjeros "ad hoc" y alentar la creación de un amplio frente opositor contra los sandinistas.⁶

La decisión presidencial materializaba lo que desde entonces y a lo largo de los dos mandatos repu-

⁴ The National Security Archive. *The Chronology. The Documented day-by-day Account of the Secret Military Assistance to Iran and the Contras*. Warner Books, New York, 1987, pp. 6-7.

⁵ *Washington Post*, 10 de marzo de 1982.

⁶ Los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes fueron informados parcialmente de la decisión presidencial en la medida en que sólo se les indicó que la fuerza paramilitar que crearía la CIA sería utilizada únicamente para golpear supuestas instalaciones cubanas en Nicaragua. Es un hecho que en el Congreso de Estados Unidos, independientemente de las posiciones de los representantes respecto al gobierno nicaragüense, la política de apoyar encubiertamente a los "contras" fue controversial desde el principio.



blicanos sería la política de Washington hacia el régimen sandinista. La creación de esa fuerza armada irregular, que con el transcurso del tiempo incrementaría rápidamente el número de sus efectivos, serviría de vehículo para aplicar una presión militar constante y una guerra de desgaste nunca declarada contra el gobierno nicaragüense. Esta presión, instrumentada paralelamente a medidas diplomáticas y sanciones económicas y financieras — corte de la cuota de banana nicaragüense en 1981 y de la azucarera en un 90% en 1983; cancelación, en abril de 1981, del remanente de 15 millones de dólares de los 75 millones aprobados en un programa de ayuda en 1979; suspensión de un empréstito de US\$ 7 millones de la AID en septiembre de 1981; presiones a organismos financieros internacionales para disminuir o suspender créditos y ayuda económica a Nicaragua; embargo comercial en mayo de 1985, etc. — configurarían la política global de desestabilización y reversión del gobierno de Nicaragua. La CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa serían las principales oficinas y agencias gubernamentales encargadas de desarrollar esta estrategia, las más de las veces al margen de las disposiciones y restricciones establecidas por el Congreso en la política exterior hacia Centroamérica.

Los pasos de la reversión y la construcción del ejército "contra"

Tras el colapso de la dictadura somocista, miles de soldados y oficiales de la Guardia Nacional⁷ huyeron de Nicaragua para refugiarse en las naciones vecinas y en Miami. Tan sólo en la frontera hondureña se asentaron cerca de 8 mil exguardias, un porcentaje importante de los cuales, luego de reponerse de la aparatosa derrota, empezaron a reorganizarse en 1980 apoyados por el gobierno de Estados Unidos.

A mediados de 1981 ya eran públicos la preparación y el entrenamiento militar que exguardias nacionales y cubanos anticastristas recibían de parte de exboinas verdes del ejército de Estados Unidos en centros de adiestramiento localizados en Florida, Louisiana y California: "Bajo las administraciones de Carter y Nixon — afirmaba en una entrevista para el *New York Times* un exiliado cubano — lo que ahora hacemos era un crimen. Con el gobierno de Reagan

nadie nos ha molestado durante 10 meses."⁸

El grueso de las tuerzas contrarrevolucionarias está compuesto por somocistas y exguardias nacionales y su principal base de operaciones se localiza en Honduras.

El espectro de las organizaciones armadas antisandinistas ha sido amplio y complejo. Los primeros grupos en constituirse en 1980/81 fueron la Legión 15 de Septiembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense, conformados en su mayor parte por oficiales y soldados de la desaparecida Guardia Nacional asentados en Honduras. Por esas fechas se estructuró también la Organización 11 de Noviembre, antecedente de la Unión Democrática Nicaragüense (UDN) — creada por elementos que se opusieron a Somoza y que semanas después del triunfo revolucionario adoptaron posiciones antisandinistas — y cuyo brazo armado fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses (FARN). Mediante la fusión de las tres primeras organizaciones, en 1981 se creó la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), asentada en la frontera hondureño-nicaragüense y sin duda la más importante y numerosa de las organizaciones antisandinistas, hacia la cual se han canalizado la mayor parte de la ayuda financiera y apoyo del gobierno estadounidense.

En 1981 se conformó también Misura, organización indígena de la Costa Atlántica. La unidad, a mediados de 1982, del Frente Revolucionario Sandino de Edén Pastora, la UDN/FARN, Misurasata — organización de indígenas miskitos creada ese año y que retoma el nombre de una organización similar fundada en 1979 por el régimen sandinista — y el Movimiento Democrático Nicaragüense de Alfonso Robelo — organización política establecida en 1978 — dio lugar a la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), con base de operaciones en la frontera sur de Nicaragua.

A mediados de 1985 y también con operaciones — aunque limitadas — en el sur, se creó el BOS (Bloque Opositor del Sur), y en la Costa Atlántica el grupo indígena Kisan. Ese año, en lo que se interpreta como un significativo avance en la unidad de las fuerzas antisandinistas, se estableció la alianza de la FDN, Kisan y una fracción de ARDE en la Unión Nicaragüense Opositora (UNO), en cuya constitución las presiones del Departamento de Estado para zanjar las diferencias políticas entre los diferentes grupos contrarrevolucionarios fueron fundamentales.

⁷ Datos oficiales de abril de 1978 señalaban que el número de efectivos de la Guardia Nacional era de 9 171 hombres, cifra que muy seguramente se incrementó a lo largo de 1979 y hasta la caída de la dictadura militar de los Somoza a mediados de julio.

⁸ Central American Historical Institute, *U.S.-Nicaragua Relations. Chronology of policy and impact, January 1981-January-1984*, Georgetown University, Washington, 1984, p. 4.

El argumento que el gobierno de Reagan ha manejado sistemáticamente para justificar su política hacia Nicaragua es el de que este país se convirtió a partir de 1980 en puente para el abastecimiento de armas soviéticas y cubanas a los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, constituyéndose en una amenaza para las naciones vecinas y una fuente de desestabilización a nivel regional.⁹ El controvertido —y malogrado— *Libro Blanco* publicado por el Departamento de Estado en febrero de 1981 sostenía esta posición. A este argumento se agregaría más tarde el peligro que para los países aliados en el área y para los intereses de seguridad de Estados Unidos representaba el acelerado proceso de militarización nicaragüense,¹⁰ a consecuencia de la escalada militar de la Casa Blanca contra esa nación.

La presión militar ejercida por las fuerzas antisandinistas tendría como objetivo impedir el tráfico de armas y presionar al gobierno de Nicaragua para que reorientara el rumbo político del proceso, el que, de acuerdo con los postulantes de esta política, se encaminaba a pasos acelerados hacia el "totalitarismo marxista".

Gobiernos como los de Israel y Argentina —y posteriormente Arabia Saudita, a nivel financiero, a partir de 1984— participaron activamente en 1981-1982 en el entrenamiento, financiamiento y aprovisionamiento de los antisandinistas. Honduras desempeñaría tempranamente el papel de retaguardia territorial y logística de estas fuerzas. La derrota que sufriera en la Guerra de las Malvinas en 1982 y el respaldo brindado por Estados Unidos a Gran Bretaña en el conflicto bélico, obligó al gobierno militar argentino a desligarse de la política norteamericana en la región y a retirar al personal de sus fuerzas armadas que asesoraba y entrenaba a los "contras".

Aunque en 1982 la retórica de la Casa Blanca respecto a su política nicaragüense era la de que a través de la actividad militar de los contrarrevolucionarios se pretendía solamente hostigar al gobierno sandinista y presionarlo a su democratización interna, la escalada que fue adquiriendo el conflicto armado a lo largo de ese año y que amenazó con desembocar en un enfrentamiento militar fronterizo entre Honduras y Nicaragua, condujo a que el Congreso estadounidense aprobara en diciembre de 1982 la

primera Enmienda Boland, que prohibía a la CIA y al Departamento de Defensa destinar fondos y participar en actividades militares con el fin de derrocar al gobierno nicaragüense o provocar un choque entre Nicaragua y Honduras.

Para 1982, las fuerzas antisandinistas no sólo habían incrementado considerablemente el número de sus efectivos,¹¹ sino que la actividad de la CIA en la crisis centroamericana y su participación en las acciones encubiertas contra Nicaragua eran cada vez más comprometedoras. Durante ese año, por ejemplo, oficiales de la agencia de inteligencia habían confirmado al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que la voladura de los puentes Río Negro y Ocotal en el norte de Nicaragua en el mes de marzo había sido ejecutada por un equipo de expertos en demolición entrenados por la CIA.

Aunque en noviembre la Casa Blanca había reconocido su respaldo a la realización de "operaciones militares clandestinas en pequeña escala para presionar, pero no para derrocar, al gobierno nicaragüense",¹² a finales de ese año, oficiales de inteligencia acotaban que las actividades encubiertas de Estados Unidos en Centroamérica se habían convertido "en el más ambicioso operativo paramilitar y político montado por la CIA en aproximadamente una década."¹³ A principios de 1983, esta agencia había establecido un programa de US \$50 millones en actividades de inteligencia en la región que involucraban unos 150 agentes y técnicos.

Para 1983, no obstante el controvertido debate en el Congreso sobre la continuación de la ayuda a los antisandinistas, el presidente Reagan —quien aún sostenía que su gobierno no pretendía el derrocamiento del régimen nicaragüense— llamó en el mes de mayo a los grupos contrarrevolucionarios "luchadores de la libertad" y reconoció por primera vez, públicamente, el apoyo de la Casa Blanca a estas fuerzas. Respecto a Nicaragua, en un discurso televisado a nivel nacional, señalaría que se trataba de un asunto en el cual la seguridad nacional de todo el hemisferio estaba comprometida: "El problema no es sólo El Salvador. . . —apuntaría el primer mandatario—. Mi preocupación ha sido desde el principio que México es el último objetivo de estas fuerzas que desestabilizan a las naciones de América Central".¹⁴

⁹ Cfr. United States Department of State, "Revolution beyond our borders". *Sandinista intervention in Central America*, Special Report, Núm. 132, septiembre de 1985.

¹⁰ El número de efectivos de las Fuerzas Armadas nicaragüenses en 1985 era de 61 800 hombres. Cfr. International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 1984-1985*, London, 1984.

¹¹ Algunas estimaciones calculaban en 4-5 mil hombres los efectivos antisandinistas en 1982.

¹² *The New York Times*, 2 de noviembre de 1982, citado por *The Chronology*, Op. Cit., p. 19.

¹³ *The New York Times*, 4 de diciembre de 1982, *Ibid.*, p. 20.

¹⁴ *The New York Times*, 10 de marzo de 1983, citado por *U.S.-Nicaragua Relations*, Op. Cit., p. 15.

El año de 1983 marca un cambio de cualidad en las acciones armadas contra Nicaragua. Pese al crecimiento numérico de las fuerzas antisandinistas y el aumento de sus acciones en territorio nicaragüense, la actividad encubierta de la CIA seguía siendo relevante y sustantiva. A mediados del año la agencia llega a la conclusión de que los ataques a objetivos económicos y de transporte estratégicos significarían un medio más rápido y efectivo para golpear a los sandinistas que los esfuerzos desplegados hasta ese momento. Consecuencia de este cambio de táctica será el ataque desde lanchas pirañas a los tanques de almacenamiento de gasolina del puerto de Corinto en el Pacífico nicaragüense en el mes de octubre y el minado de los puertos de ese país en 1984, acciones en las que, como más tarde se sabría, no participaron fuerzas contrarrevolucionarias sino equipos dirigidos y entrenados por la CIA, denominados UCLA's (Unilaterally Controlled Latino Assets) y reclutados en el ejército hondureño y de otras partes.¹⁵

Sin duda, en esta etapa de desarrollo de la estrategia de reversión, existía la convicción de la Casa Blanca de que las fuerzas antisandinistas tenían el apoyo político suficiente y contaban con las condiciones materiales para infringir severos golpes al gobierno nicaragüense y derrotar, en un corto plazo, al Ejército Popular Sandinista (EPS).

Funcionarios del gobierno estadounidense afirmaban en junio de 1983 que los contrarrevolucionarios, cuyo número se estimaba para esas fechas en 8 mil hombres, controlarían una tercera parte de la población rural y la mitad del territorio nicaragüense en diciembre de ese año.

Esta visión triunfalista se vio reforzada por los cambios operados en la actividad militar de los antisandinistas. Lo que en años anteriores no era sino el operar de bandas guerrilleras dispersas y relativamente organizadas, para 1983-84 se había convertido en la actividad de verdaderas unidades militares bien pertrechadas y entrenadas, dotadas de equipo y armamento moderno y sofisticado. En esos años penetran masivamente a través de la frontera norte las llamadas "fuerzas de tarea" de la FDN, la principal organización "contra", cuyos efectivos se estimaban para ese entonces en unos 12-15 mil hombres.

Datos de esta agrupación¹⁶ indican que en 1985 estaba estructurada en 14 comandos regionales, cada

uno de los cuales contaba con un promedio de 800 combatientes organizados en 2-4 fuerzas de tarea.

Funcionarios de la CIA admitirían posteriormente ante el Congreso que la agencia había asumido ya para esos momentos "un control diario de las actividades contrarrevolucionarias, que incluían ataques, bombardeos a blancos precisos y contactos permanentes con líderes rebeldes."¹⁷

Los años de 1983 y 1984 marcan, sin duda, el período de mayor avance y despliegue del accionar militar antisandinista. Pese a ello, los limitados éxitos de estas fuerzas en el terreno de la guerra frente a la consolidación de las estructuras de defensa del Ejército Popular Sandinista (EPS), y su incapacidad para establecerse de manera regular y permanentemente en territorio nicaragüense determinaron que funcionarios del Pentágono y la CIA reconocieran a partir de 1984 que los contrarrevolucionarios no constituían una amenaza real para el gobierno de Nicaragua: que podían, en efecto, convertirse en un factor de presión militar y de desestabilización, pero que contaban con nulas posibilidades para triunfar por sí solos.¹⁸

Aunque en octubre de 1984 el Congreso aprueba la llamada Segunda Enmienda Boland, que suspende toda la ayuda militar a los antisandinistas para el año fiscal 1985 que no fuera específicamente autorizada por esa institución, y la participación de la CIA en el conflicto centroamericano es severamente cuestionada por el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que califica de ilegal y fruto de un manejo negligente al *Manual de operaciones psicológicas en guerra de guerrillas* editado por esa oficina en 1983 a fin de desestabilizar al régimen nicaragüense, la Casa Blanca se mantuvo firme en la aplicación de su estrategia de reversión del proceso revolucionario sandinista y de apoyo a las fuerzas "contras".

La presentación de la versión final del llamado Informe Kissinger en enero de 1984, en el cual se solicitaban 8 billones de dólares de ayuda para los países centroamericanos — con exclusión de Nicaragua — durante un período de cinco años, significó un espaldarazo bipartidista a la política de Reagan en la región. De otra parte, la prohibición del

¹⁵ *The New York Times*, 16 de octubre de 1983 y *The Wall Street Journal*, 6 de marzo de 1985, citados por *The Chronology*, Op. Cit., p. 40.

¹⁶ *Documents on the Nicaraguan Resistance: Leaders, military personnel and program*, U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington D.C. Special Report No. 142, s.f.

¹⁷ NACLA, *Sowing dragon's teeth. The U.S. war against Nicaragua*. Vol. XX, Núm. 4, julio/agosto de 1986, p. 23.

¹⁸ El general Paul Gorman, jefe del Comando Sur en la Zona del Canal en Panamá, admitiría en 1985 que la "contra" no representaba un verdadero peligro militar para los sandinistas.

Congreso¹⁹ de otorgar ayuda gubernamental a los antisandinistas no fue un obstáculo para que a través de canales extraoficiales se buscaran fuentes de financiamiento alternativas. El escándalo Irán-contras, que estalla en noviembre de 1986, sacaría a la luz pública los esfuerzos desplegados por funcionarios de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional para establecer una red de particulares, organismos privados e, incluso, instancias gubernamentales en el ámbito internacional que permitieran al acopio de fondos y recursos para las fuerzas contrarrevolucionarias. Gracias a informaciones que el Irán-contras permite trasciendan a la opinión pública se sabría, por ejemplo, que de julio de 1984 a marzo de 1985, los antisandinistas recibieron 32 millones de dólares en ayuda de una sola fuente: el Rey Fahd de Arabia Saudita.²⁰

La declaración del presidente Reagan en torno a su propósito de "cambiar la estructura básica actual del gobierno nicaragüense",²¹ hecha pública en febrero de 1985, entraba en abierta contradicción con los argumentos tradicionalmente enarbolados por la administración para justificar su política hacia Nicaragua. Hasta ese momento — y continuaría haciéndolo posteriormente —, la Casa Blanca sostenía que mediante su respaldo y financiamiento a la "contra" no pretendía el derrocamiento del gobierno nicaragüense sino tan sólo presionar política y militarmente a los sandinistas para obligarlos a democratizar el país y a negociar con las fuerzas opositoras.

Límites y alcances de la estrategia de reversión

Los avances logrados por el EPS en el terreno militar y en el marco de la definición y consolidación de una doctrina militar propia: la de la Guerra Nacional Patriótica y Popular, sustentada en una estrategia de defensa integral, de carácter popular y pacifista, y consistente en la resistencia activa y la extensión de la guerra ante una agresión externa,²² determinaron que las fuerzas antisandinistas entra-

ran en un proceso de repliegue y debilitamiento a partir de finales de 1985. En Nicaragua se hablaba de ese año como el del inicio de la "derrota estratégica" de la "contra", proceso que, de acuerdo a informaciones del gobierno nicaragüense, se profundizó a lo largo de 1986, caracterizándose por la pérdida de la iniciativa estratégica de la guerra por parte de estas fuerzas frente a la acción permanente del EPS y por la adopción de una modalidad de lucha cada vez más defensiva y pasiva: "Si bien es cierto que ellos avanzaron en cuanto a su presencia, fracasaron en cuanto a poder desarrollar una guerra civil — como pensaron hacer — y potenciar un ejército grande. Los contras han estado en lo que nosotros llamamos un proceso de "derrota estratégica" Eso no significa que ya están aniquilados, sino que sus posibilidades de convertirse en un ejército fuerte, en una punta de lanza de una agresión mayor, son cada día menores".²³

Datos de 1986 señalan que el número de efectivos antisandinistas se redujo de unos 15 mil hombres en 1984 — considerado como el de mayor amplitud y proyección de su actividad militar — a 6 mil, de los cuales, según estimaciones, sólo se encontraban operando en el país para diciembre de ese año unos 2 mil. Un balance sobre los costos de la guerra al término de 1986 indicaba, igualmente, que la "contra" había tenido ese año 6 950 bajas,²⁴ de las cuales 4 532 eran muertos,²⁵ cifra que sumada a las bajas sufridas en años anteriores arroja un total de más de 16 mil — entre muertos, heridos y capturados.

La ausencia de una base social de apoyo político interno a nivel nacional y los reveses sufridos a lo largo de 1986, redujeron considerablemente la capacidad táctica y operativa de los antisandinistas y les impidieron montar exitosamente operaciones de gran envergadura, obligándolo a rehusar el combate directo con el EPS y a adoptar una modalidad de lucha abiertamente terrorista, dirigida a intensificar sus ataques contra objetivos económicos — puentes, cooperativas agrícolas, torres de energía eléctrica, caminos, etc. — y contra la población civil, con el objetivo de sembrar el terror, minar las bases sociales del régimen y provocar graves pérdidas a la ya de por sí desgastada economía nicaragüense a causa de la guerra

¹⁹ La suspensión temporal de la ayuda militar a los antisandinistas durante el año fiscal 1985 por parte del Congreso no impidió que esta institución aprobara ese año 27 millones de dólares en ayuda "humanitaria" para estas fuerzas.

²⁰ *Cfr. The Chronology*, Op. Cit.

²¹ *Sowing dragon's teeth*, Op. Cit., p. 24.

²² "El Estado nicaragüense tiene una doctrina militar que se caracteriza por el elemento antimperialista, clasista, popular, revolucionario y porque su objeto fundamental es la defensa de la revolución popular sandinista", citado en Raúl Benítez, et. al., *Fuerzas Armadas, sociedad y pueblo: Cuba y Nicaragua*, ponencia presentada al Seminario "Autonomización castrense y democracia: Dinámica del armamentismo y del militarismo en América Latina", FLACSO, Santiago de Chile, 23-25 de mayo de 1985. Versión corregida en junio de 1986, pp. 61-62.

²³ "Una estrategia de defensa total". Entrevista con el ministro de Defensa Humberto Ortega en *América Central. Boletín Informativo*, Agencia Nueva Nicaragua, Año 3, Núm. 38, 6 de octubre de 1986, p. 6.

²⁴ De enero a julio de 1986 los antisandinistas sufrieron el 30% de sus bajas totales en los cinco años que lleva la guerra.

²⁵ Gregorio Selser, "Los costos de la guerra de baja intensidad de Estados Unidos para Nicaragua", en *El Día*, México, 26 de febrero de 1987.

Tras el reconocimiento de la imposibilidad de una victoria militar de la "contra" por parte de importantes sectores políticos y militares en Estados Unidos, la estrategia de la reversión del gobierno sandinista fue objeto de una revisión y ajuste que condujo a descartar las posiciones triunfalistas e inmediatas prevalecientes a lo largo de 1982-83.

Todo parece indicar que a partir de 1985 se impone la concepción de que la crisis nicaragüense significaba un conflicto cuya resolución no sería en el corto sino en el mediano o largo plazo y que por las mismas razones al uso de la fuerza habría que incorporar, con especial énfasis e importancia, elementos económicos, políticos, ideológicos, psicológicos, etc., para un desgaste y desestabilización globales del proceso revolucionario.

La opción estratégica de la reversión adoptó, así, durante la segunda administración Reagan, el acabado perfil de una guerra contrarrevolucionaria prolongada que lejos de pretender el colapso militar del régimen sandinista busca su derrocamiento socavando el apoyo popular a la revolución mediante la agudización y agravamiento de la crisis económica nacional. Sin embargo, aunque se admite la imposibilidad de un triunfo militar de los antisandinistas, es un hecho que "lo militar seguirá siendo fundamental en la estrategia en la medida en que forma parte de un todo destinado a revertir el proceso nicaragüense a largo plazo, en una guerra que se concibe como prolongada".²⁶ En este sentido hay que reconocer que, pese a sus fracasos militares, la actividad contrarrevolucionaria ha sido exitosa en cuanto al número de víctimas que ha provocado y en tanto factor de desgaste para el gobierno por la presión militar que ejerce, los daños económicos que ha ocasionado en la infraestructura, la producción y el capital existentes y en la movilización de recursos humanos y materiales a que ha obligado al régimen para enfrentar la guerra.

Cálculos gubernamentales indican que de 1981 a 1987 unos 510 mil nicaragüenses han sido movilizados en el esfuerzo bélico. Desde 1985, alrededor de un 20% de la población masculina económicamente activa —la PEA estaba compuesta en 1986 por más de un millón de personas, la mitad de ellas hombres— ha estado integrada anualmente en las tareas de la defensa, lo que significa que tanto los adultos como los jóvenes incorporados se ven obligados a suspender sus labores productivas y a interrumpir su capacitación y educación técnica y profesional, con

el costo que esto implica en la formación de recursos humanos. Así, por ejemplo, la matrícula universitaria, que se había incrementado de 21 mil estudiantes en 1979 a 34 mil en 1983, decreció a 27 mil alumnos en 1987 como consecuencia de la movilización de los jóvenes en los frentes de batalla. Sin la presencia de la guerra y manteniendo los ritmos de crecimiento observados en los años anteriores, se calcula que la matrícula universitaria hubiera sumado aproximadamente unos 56 mil estudiantes en 1987. La agresión ha impactado, de igual manera, los índices de alfabetización alcanzados por la Cruzada Nacional de Alfabetización realizada en 1980. La campaña logró reducir el analfabetismo del 50.3% registrado en 1979 al 12.9%. Este índice se incrementó, sin embargo, al 20% en 1987 debido a los recortes presupuestales en el gasto social y ante la imposibilidad de mantener el programa de Educación de Adultos con la intensidad que observó hasta antes de que los enfrentamientos se extendieran a amplias zonas del país.

En lo tocante a la economía y la producción, el conflicto bélico no sólo ha significado cuantiosas pérdidas sino que ha obligado a suspender, posponer y/o modificar programas de desarrollo económico y social prioritarios para el avance del proceso revolucionario. Henry Ruiz, ministro de Cooperación Externa, indicaba en octubre de 1987 que la guerra y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde 1981 habían significado pérdidas por 4 mil millones de dólares. De ese monto, 2 mil 800 millones corresponden a daños directos e indirectos y los restantes 1 200 millones se atribuyen al lucro cesante o a las ganancias que se dejaron de percibir durante ese período. La dimensión de estas pérdidas y sus repercusiones en la estructura socioeconómica pueden entenderse mejor si se comparan con el producto de las exportaciones, cuyo monto, según datos de la CEPAL, sumó 243 millones de dólares en 1986, calculándose en unos 225 millones para 1987, de acuerdo con fuentes oficiales.

La guerra ha obligado, entre otros, a desarrollar una "economía de sobrevivencia" y a militarizar la economía nacional. Por lo que toca a la primera, su reconocimiento determinó la sincronización del proceso productivo con la defensa, a fin de garantizar la capacidad de resistencia frente a la agresión y generar las condiciones que permiten sostener la sobrevivencia económica y sienten las bases para la posterior superación de la crisis. En cuanto a la militarización de la economía, ésta se refleja en aspectos variados de la vida nacional: el 20% del consumo nacional de productos básicos, por ejemplo, se destinó en 1986 a satisfacer las necesidades de las

²⁶ Lilia Bermúdez, *Op. Cit.*

fuerzas movilizadas y más del 50% del gasto público se orientó a la defensa nacional.

Por lo que respecta a las pérdidas humanas, para julio de 1986 se estimaba que las víctimas* ocasionadas por la guerra entre 1981 y 1987 sumaban unas 34 mil 290 personas, de las cuales 16 mil 925 eran nicaragüenses involucrados con la contrarrevolución²⁷ y el resto población civil, efectivos del EPS, reservistas y milicianos. A mediados de 1987 esta cifra se había incrementado a 43 mil 176 personas, el 55% de las cuales — 22 mil 495 — correspondía a víctimas mortales, incluyendo entre ellas a 2 mil 327 mujeres y 2 mil 210 niños. Según estos datos, el 1.35% de la población de Nicaragua — cuya población total es de unos 3 millones 200 mil habitantes — ha sido víctima de la guerra y un 0.7% ha muerto como consecuencia de ella.²⁸

Información oficial y de organismos humanitarios regionales da cuenta, además, de casi 10 mil huérfanos y 19 mil lisiados de guerra así como 250 mil personas — campesinos en su mayoría — radicadas en las regiones afectadas por el conflicto — las zonas de guerra cuentan aproximadamente con un millón de habitantes — que han debido ser desplazadas — en ocasiones forzosamente — y reubicadas en nuevos asentamientos rurales en otras áreas del país, lejos del teatro de la guerra.

Perspectivas de negociación y de paz en el marco de la agresión

La aprobación de 100 millones de dólares²⁹ de ayuda a los antisandinistas por parte del Congreso de Estados Unidos en junio de 1986, no sólo permitió constatar la ausencia de discrepancias de fondo entre los congresistas demócratas y republicanos respecto de la política de reversión de la Casa Blanca hacia Nicaragua,³⁰ sino que favoreció a la reactivación de las acciones militares de los "contras" en 1987 y recrudeció la guerra en el país centroamericano.

* El concepto incluye a secuestrados, heridos y muertos.

²⁷ Barricada, Managua, 20 de julio de 1986.

²⁸ "14 preguntas a los sandinistas", en *Envío*, Managua, Año 6, Núm. 75, septiembre de 1987.

²⁹ Los 100 millones de dólares se repartieron en 30 millones en ayuda humanitaria "no letal" y 70 millones en asistencia militar sin restricciones.

³⁰ La inmensa mayoría de los representantes rechazan lo que estiman de viraje "comunista" y "totalitario" del gobierno nicaragüense, pero se muestran extremadamente escépticos y cautelosos sobre las posibilidades reales de la "contra" para obligar a los sandinistas a reorientar su política en sentido "moderado" y "democrático". Más bien habrá que enfatizar su preocupación y temor porque el incremento de la ayuda a estas fuerzas involucre en el plano militar y en forma cada vez más creciente a Estados Unidos en el conflicto centroamericano.

Lo que distingue esta etapa de las anteriores es que la renovada actividad militar de los antisandinistas — cuyo objetivo primordial es recuperar la iniciativa en el campo de batalla para hacer propaganda a favor de su causa con miras a la aprobación de nuevos fondos y recursos en el Congreso a principios de 1988 — se lleva a cabo en un contexto político sustancialmente diferente al de años anteriores. Aunque las fuerzas irregulares contrarrevolucionarias están actualmente en posesión de un avanzado y sofisticado armamento, propio de ejércitos convencionales — misiles tierra-aire "Red Eye", helicópteros, sistemas electrónicos de comunicación y detección, etc. —, cuestión que imprime al conflicto bélico en Nicaragua una dimensión cualitativamente superior y una nada desdeñable gravedad, es un hecho que esta fase de la agresión tiene lugar en el marco de la profunda crisis política provocada en el gobierno estadounidense por el escándalo Irán-contras y en el contexto de la iniciativa de paz sin precedentes suscrita por los gobiernos de la región en los Acuerdos de Esquipulas II.

Por lo que toca a la contrarrevolución nicaragüense, es improbable que ésta, tras sus fracasos e ineptitud anteriores, pueda constituirse en una alternativa militar y política frente al régimen revolucionario. A tales argumentos habría que agregar la tradicional división y falta de unidad que ha caracterizado a estas fuerzas, pese a los esfuerzos de funcionarios estadounidenses — como el Secretario Adjunto de Asuntos Interamericanos, Elliott Abrams — por resolver esta situación; la asociación que se hace de los "contras" con el narcotráfico internacional y con el ejercicio de una política terrorista y violatoria de los derechos humanos; la falta de una figura política destacada y carismática en el seno de estas fuerzas, capaz de aglutinar y de dirigir a la oposición al gobierno sandinista, y, los más importante, su incapacidad para consolidar una base de apoyo político estable y de alcances nacionales.

Con relación a los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala el pasado 7 de agosto, no cabe duda que Esquipulas II representa un momento de indiscutible politización del conflicto regional, en el que los aspectos del diálogo y la negociación parecieran destacar por sobre los militares, los cuales primaron durante todos estos años. Los acontecimientos desarrollados en Nicaragua a partir de esa fecha parecen indicar que el régimen sandinista ha aceptado el reto de ampliar y profundizar el pluralismo político en el seno del proceso popular revolucionario. Tras el encuentro de Guatemala, el gobierno ha emprendido importantes iniciativas que no sólo han abierto espacios políticos cerrados y/o restringidos a causa

de la agresión externa y la agudización de la lucha política interna, sino que también han revitalizado el debate local y favorecido el diálogo entre las fuerzas opositoras y el gobierno.

El grado de autonomía expresado por los países centroamericanos respecto de Washington durante el encuentro de Esquipulas y las posibles repercusiones de los compromisos suscritos en la continuidad de la aplicación de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica constituyen una legítima preocupación para la administración Reagan, toda vez que los resultados de la reunión fueron una verdadera sorpresa para la Casa Blanca, cuya política hacia la región se ha visto debilitada y cuestionada tras el "Irán-contras".

Los dos grandes afectados por los Acuerdos, en el caso de Nicaragua, son sin duda las fuerzas contrarrevolucionarias y la política de reversión del proceso sandinista. Respecto a los primeros, aunque el propio Reagan ha reafirmado que no abandonará a los "luchadores de la libertad", argumentando que ha sido la presión de los "contras" lo que obligó a Nicaragua a sentarse en la mesa de negociaciones y a suscribir los compromisos de Esquipulas II y que el mantenimiento de esta presión sobre el gobierno sandinista será la única garantía para que éstos lleven a cabo la aplicación de los Acuerdos, es un hecho que la sobrevivencia de la "contra" depende de la renovación de una ayuda hoy suspendida y cuestionada por sectores cada vez más numerosos del sistema y la opinión pública estadounidenses, como es también cierto que en la encrucijada de la actual coyuntura estas fuerzas carecen de un plan contingente para encarar la paz y la lucha política.

En lo tocante a la estrategia de la reversión, no cabe duda que, al menos por el momento, ésta se verá matizada sin que ello implique que la Casa Blanca haya renunciado a su propósito de derrocar al gobierno sandinista. Los pasos dados por Nicaragua en la consecución de la paz y la reconciliación interna son insuficientes para el gobierno norteamericano, que ha calificado las medidas como de "relajamiento temporal de los controles". En este sentido, aunque el "Irán-contras" repercutió negativamente en la política exterior del presidente Reagan hacia Nicaragua, de ninguna manera el escándalo ha afectado las líneas fundamentales de esta política, las cuales persisten.

La paz, para Nicaragua, es una demanda urgente y la única garantía para que los proyectos de transformación económica y social planteados por el proceso revolucionario puedan ser desarrollados y realizados. Existe, sin embargo, para los dirigentes nicaragüenses, claridad suficiente sobre las limita-

ciones que Esquipulas II encierra en tanto Estados Unidos mantenga su beligerante política hacia la región y particularmente hacia Nicaragua. El presidente de este país, Daniel Ortega, ha declarado al respecto: "Si bien es cierto que soplan aires de esperanza, vivimos todavía una guerra terrible y no nos vamos a engañar, pues aunque apoyamos y somos consecuentes con los Acuerdos de Guatemala, la agresión sigue siendo impulsada por el gobierno de Ronald Reagan".

Las dificultades para la concreción de la pacificación y la apertura política en Nicaragua son múltiples: desde las limitaciones que impone una economía deteriorada por la guerra, hasta la persistencia de la agresión militar de la "contra", que involucra peligrosamente a naciones vecinas como Honduras, pasando por las dificultades y escollos entre los países signatarios de los Acuerdos para definir el concepto de simultaneidad en la aplicación de las medidas de diálogo, amnistía y cese del fuego contempladas en el Plan.

Hasta ahora, la guerra ha actuado como un factor que ha potenciado el consenso respecto al proceso revolucionario y contribuido a legitimar la política desplegada por el gobierno sandinista frente a la agresión externa. El reto actual es que ese consenso se profundice y enriquezca en un panorama donde el juego político y el debate con la oposición interna tienden a incrementarse e institucionalizarse y cuando existe el claro propósito por parte de ciertos sectores políticos estadounidenses —entre quienes se encuentra el actual secretario de Defensa, Frank Carlucci— de promover a la "contra" como una opción política —una especie de "nueva derecha"— frente a los sandinistas y con el generoso respaldo económico, político e ideológico de la Casa Blanca.